

JOSE AUMENTE

Escritor



Los riesgos de decir la verdad

SE ha dicho, y es verdad, que la capacidad de autoengaño en el hombre es casi infinita. Son muchas las teorías, las creencias y hasta las convicciones más arraigadas, que han sido desmentidas por los hechos y las «realidades». Pero esta capacidad de auto y heteroengaño llega a sus más altas cotas cuando se refiere al mundo de la política. Y el ejemplo lo tenemos en nuestra sociedad.

Existe una dialéctica entre el pueblo y sus gobernantes que aquí, en nuestro país, ha alcanzado niveles inconcebibles de mutuo enmascaramiento. Los gobernantes dicen y prometen aquello que más sintoniza con lo que la gente prefiere en cada momento, aun a conciencia de que es imposible; los ciudadanos se dejan querer, los votan, aún despreciándolos en el fondo, y sabiendo que es mentira lo que dicen. Hay un círculo vicioso de incumplimientos recíprocos, de complicidades implícitas, que van degradando progresivamente la situación del país. Y así, porque los gobernantes gastan irresponsablemente mal lo que recaudan, los contribuyentes no tenemos reparos morales para defraudar a Hacienda. Las ilegalidades inundan nuestra vida social, y éstas, si son colectivas y numerosas, son toleradas por las autoridades en aras de no perder el ulterior respaldo de los votos.

El ciudadano vota a los que le engañan porque sabe que después les pagará con la misma moneda, transgrediendo lo que en el futuro ordenen.

LOS LIMITES DEL ENGAÑO.—Todo esto puede durante mucho tiempo ir bien. Mientras se pueda consumir y divertirse, mientras exista televisión alienante, mientras que las triquiñuelas, pensiones, subvenciones y prestaciones sociales permitan mantener su ritmo ascendente. Hasta que llega la hora de la verdad, y con ella la quiebra de un «status quo» ficticio y autoengañante. Por lo menos los responsables del Gobierno debieran de haber sabido, que después de la «década prodigiosa» del felpismo (82-92) del «milagro español», del «país donde era más fácil y rápido enriquecerse», que culminó con los fastos-nefastos del 92, sobrevendría irreversiblemente la «caída del caballo». Y, sin embargo, aún parece que no nos hemos dado por enterados de la gran parte de «culpabilidad» que en ello, tanto Gobierno como ciudadanos, tenemos.

Ya ante su primer mandato, en el 82, Felipe González señaló que su máxima aspiración era que «el país funcionase». Y el país no sólo no ha funcionado mejor, sino que lo ha hecho en sentido opuesto, degradándose más y más. Lo que ha ocurrido en todos los planos: el adminis-

trativo, el productivo, el moral y, sobre todo, en «el padre» de todos los planos, el político.

Constatar esta realidad, por sabida, puede servirnos de poco, si no alcanzamos a comprender cómo y por qué ha ocurrido así. Y si no, nos percatamos de que se trata de una dinámica en la que todos —políticos y ciudadanos— nos hemos dejado llevar con suma complacencia.

A mi modo de ver, la clave está en la actitud, propia de cualquier animal de la escala zoológica, de *aprovecharse individualmente de lo que se le viene a mano*. Desde aprovecharse indebidamente de una receta médica de la Seguridad Social, a poner una trampa en el contador de la electricidad para pagar menos. Desde eludir el IVA, a cualquier índole de economía sumergida. Desde el funcionario —alto o bajo— que abre un despacho privado en que resuelve los problemas que le corresponden por su cargo, al

dad del «más de lo mismo», incluso nuestro ancestral grito de «vivan las cadenas», y mucho menos, o nada, un proyecto real de solidaridad y cambio.

MANIPULACION Y CHAPUZA.—Una estructura social tan lábil, apoyada desde arriba —el Estado— por la manipulación y el engaño, pero sostenida desde la base por la triquiñuela, el apaño y la chapuza, es imposible que pueda sostenerse indefinidamente sin resquebrajarse.

Ahora que le estamos viendo «las orejas al lobo» es llegado el momento de abrir los ojos, hablar claro, decir la verdad a los ciudadanos.

Pero, ¿qué político está dispuesto a decirle a sus potenciales electores algo que no quieren oír: que todos, cada cual en su trabajo, en su actitud y en sus aspiraciones, tenemos que corregirnos? ¿Qué político está dispuesto a predicar con el ejemplo, renunciando a sus innumerables privilegios? ¿Quién está abierto a disminuir su status de vida, en aras de un proyecto colectivo de innovación y mejora social?

Hay dos cosas de las que el político huye como el «gato escaldado». Una, a decir la verdad, en cuanto ésta pueda enajenarle la opinión pública; otra, dar testimonio de vida ejemplar, porque ello está en contra de su afán de poderío y dominación, camuflado en la supuesta «dignidad del cargo». Posiblemente estemos llegando a una época en que ambas actitudes, que son comunes a todos los políticos —la manipulación y el despilfarro— tengan que ser sustituidas por sus contrarias, la honestidad intelectual en su contacto con el público, y la austeridad en el uso personal de los bienes estatales de que disponen. Hay un paradigma dominante, común a los gobernantes y a los gobernados: saber para dominar, dominar para enriquecerse, enriquecerse para disfrutar. Pues bien, poco a poco, y por simples necesidades de supervivencia social y económica, habrá que ir cambiándolo por otro en el que predomine el sentido de la colectividad y la ciudadanía.

En mi personal opinión, lo de menos puede ser la crisis económica, siempre más o menos tarde remontable. Tanto o mucho más grave es la crisis moral, la crisis ideológica, la crisis de las autoridades (tanto políticas, como religiosas, incluso científicas).

Nos faltan fundamentos, nos faltan consistencias, algo a lo que seriamente hoy agarrarnos. Se nos han hundido demasiadas cosas al mismo tiempo. Y, por supuesto, mientras que sea electoralmente peligroso «decir la verdad», será terriblemente inquietante nuestro actual sistema político.

CONTRA LA CONFUSION

Tránsfugas y prófugas

ANTONIO GARCIA-TREVIJANO

UNA de las grandes tonterías que dice la Constitución, esa de que la soberanía reside en el pueblo, es tan increíble que no vale siquiera como ficción. El poder de gobernar o de atribuir la función de gobierno, que es expresión de la soberanía, pertenece por derecho de apropiación ilegítima a unos pocos jefes de listas de partido. A no ser que un solo voto pueda decidir cual será la lista gobernante. La residencia de la soberanía se traslada, en este caso, desde la sede de los partidos a la casa del diputado que esté dispuesto, mediante un voto de latrocinio, a ganar la potestad personal de hacer o deshacer gobiernos. Este robo de la soberanía no está penalizado porque merece los proverbiales cien años de perdón. No deja de ser cómico el torpe desconcierto de los poderosos de oficio y de los opinadores de profesión, ante la lógica impunidad de este hurto de la soberanía ilegítima de los jefes de partido a manos de la legal soberanía de uno de sus diputados. Quienes vituperan por razones morales a los tránsfugas soberanos, no tienen en cuenta que todas las cuestiones de poder deben ser enjuiciadas con razones políticas. Por inmorral que parezca, incluso entre criminales, la traición a la pandilla de que se forma parte, el juicio moral sobre el tránsfuga carece de interés público. Lo que de verdad nos importa saber es por qué la deslealtad está propiciada en la ley magna, y por qué no se puede impedir el transfuguismo.

Las reglas del juego político han sido dictadas por un principio sagrado: libertad de voto o prohibición del mandato imperativo. Pero los jefes de equipo han impuesto en la realidad profana otro juego distinto, basado en la disciplina de voto y en un árbitro judicial que mire a otro lado. Bajo esta flagrante contradicción entre la regla legal y el juego real, criticar a los tránsfugas es como ir a un partido de fútbol, a sabiendas de que no se debe tocar el balón con las manos, para aplaudir a los infractores y abuchear al único jugador que por una vez cumple el reglamento, aunque sea para introducir la bola en su propia portería de un patadón formidable. El tránsfuga mete ciertamente la pata, en el juego real, porque todos los partidos, prófugos de la justicia constitucional, meten ilegalmente las manos en el juego formal. Cumplir la ley, en tales condiciones, requiere un esfuerzo moral tan ambivalente que solo está al alcance de la traición. Pero que nadie se llame aquí a engaño. La diferencia entre el tránsfuga de partido y el partido prófugo es igual a la que existe entre el traidor a una situación política y el traidor a la ley de las situaciones políticas. El simple tránsfuga, desleal con la fuente real de su mandato, traiciona a un solo partido y representa una política de la traición. Los jefes del profuguismo, desleales con la raíz legal de su mandato, subvierten toda la Constitución y representan la traición de la política.

Mientras la realidad y la Constitución discurren por caminos paralelos y separados, como en el Estado de partidos, habrá profuguismo colectivo y transfuguismo personal. Son, por ello, algo peor que ridículas, las exhortaciones a códigos éticos o acuerdos entre partidos para no premiar o acoger la traición. Aparte de que en asuntos de poder Roma paga siempre traidores, el voto desinteresado de un tránsfuga no encuentra barrera que no pueda traspasar. Para evitar la traición de los tránsfugas solo existe un remedio político: impedir la de los prófugos. O se juega al balompié parlamentario, como manda la Constitución, y se penalizan todas las manos del partido, o se constitucionaliza el balonmano político, legalizando el voto por mandato imperativo de partido. La conjugación política de dos juegos incompatibles, el de la Constitución formal y el de la constitución material, es una cínica ilusión intelectual de los abogados del Estado de partidos, que defienden una Constitución irreal, para que la realidad de la oligarquía de partidos parezca democrática. Pero es imposible cumplir la Constitución, en esta sociedad política esquizofrénica, sin tener el espíritu fragmentado y la propensión a la rebeldía de un magnicida. El pobre tránsfuga, más digno de piedad que de ira, desenlaza, en su conciencia moral atormentada, la insostenible contradicción de un régimen de poder, en el que se decidió a jugar, sin llegar a comprender la razón política de su necesidad de doble juego, de su doblez sistemática.

e

El ciudadano vota a los que le engañan porque sabe que después les pagará con la misma moneda, transgrediendo lo que en el futuro ordenen.

trabajador que repite las bajas por enfermedad y, al final, consigue la pensión por invalidez. Desde el falso parado, al también falso y oportunista empresario que consigue fraudulentamente subvenciones. Es decir, el tinglado por el que el país se mantiene está sujeto por frágiles hilos de corrupción y engaño. En rigor, pues, no habría que llevarse las manos a la cabeza, escandalizados, cuando los políticos que mandan se autobenefician de su cargo. Los políticos que gobiernan son fiel reflejo de los electores que les votan. Siempre se ha dicho que cada pueblo tiene los gobernantes que se merece. Y más, cuando son elegidos por sufragio universal y secreto. Aunque para tal elección haya funcionado el miedo, la seguri-